

Crónica del mes

Noviembre-diciembre

El Salvador culmina un año en el que sus procesos sociales se han decantado, en el plano político, hacia las elecciones legislativas y municipales del 2003 y, en el ámbito económico, a la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, principal destino de las exportaciones nacionales. En efecto, el 14 de noviembre se acordó dar inicio, en enero del nuevo año, a las negociaciones entre estadounidenses y centroamericanos, en vistas de un acuerdo comercial; por otro lado, un día después —mientras se inauguraba en República Dominicana la XII Cumbre Iberoamericana—, partidos políticos y ciudadanía quedaban oficialmente invitados a la fiesta cívica de marzo del 2003, dando de ese modo el banderillazo de salida en la contienda por los 262 concejos municipales y 84 curules en la Asamblea Legislativa. Además, durante los meses de noviembre y diciembre, como preludivando los próximos comicios y la negociación del TLC, estalló, con toda su gravedad, la crisis en el sistema nacional de salud, acaparando la atención de los salvadoreños. Juntos, precampaña electoral, libre comercio y salud pública en crisis, emergen como los principales temas de discusión nacional durante los dos últimos meses del 2002.

El último de ellos, a pesar de los intentos del gobierno de Francisco Flores por desviar la atención, aglutinó vitales fuerzas sociales en contra de los planes de privatización en el sector salud. No obstante, la insistente campaña publicitaria pro gubernamental en contra del gremio médico y de los sindicalistas para hacer prevalecer ante la opinión pública la versión oficial de la crisis, encontró eco en importantes sectores sociales —entre ellos, las influyentes entidades ANEP, FUSADES y las grandes empresas mediáticas—, cuyos intereses se identifican con la propuesta de Flores. La alianza entre el Ejecutivo, la empresa privada y los medios in-

formativos de derecha terminó por desgastar las iniciativas de las fuerzas opositoras, tanto en el seno de la Asamblea Legislativa como en las calles.

A medida que las posiciones se polarizaban, el *impasse* en el sector salud cobró sus costes políticos. El político más afectado fue, sin duda, Héctor Silva, alcalde de San Salvador, quien se ofreciera como mediador en el conflicto. Luego de un efímero acercamiento con el presidente Flores, el osado jefe edilicio fue reprendido por la dirigencia efemenista, al punto que perdió el apoyo partidario para reelegirse en la comuna capitalina. De paso, la rigidez y la ceguera política del FMLN llegaría a dejar el camino libre a Evelyn Jacir de Lovo, la apuesta del partido oficial para recuperar el principal ayuntamiento del país. Salud pública y política se entremezclaron, pues, dejando como resultado un balance negativo en los intentos de solución. “Presidente retira la reforma de salud”, subtitulaba uno de los matutinos nacionales el 1° de noviembre, dando un nuevo giro a las negociaciones que el Ejecutivo y los sindicalistas mantuvieron en el marco de la crisis.

El presidente Flores había aceptado, el último día de octubre, un pliego de propuestas de Héctor Silva, y reconocía a este último como miembro de una comisión que daría seguimiento a la crisis. Simultáneamente, el mandatario se había comprometido, en primer lugar, a no vetar el Decreto Legislativo 1024 que prohíbe las concesiones de servicios de salud a la empresa privada; además, se comprometía a girar instrucciones para que el “Anteproyecto de Ley de Salud Previsional” fuera retirado de la discusión en la Asamblea Legislativa y sirviera como “insumo” a la “comisión de seguimiento” propuesta para solucionar el problema. En el primer día del mes, ocurrieron impor-

tantes hechos: ante todo, Silva —cuya decisión fue desaprobada por la cúpula efemelenista— se reunió con diferentes personalidades para discutir las posibilidades de solucionar el conflicto. Mientras tanto, el gremio médico celebraba la decisión de Flores de retirar el cuerpo legal que daría vida al nuevo sistema de salud. El gremio de empresarios —aglutinado en la ANEP— se sumaba incondicionalmente a la posición de Flores. Horas más tarde, la reprimenda del FMLN se dejó sentir sobre el atrevido alcalde. “Respetamos su voluntad, pero no tiene el respaldo del partido”, aseveró el Coordinador General del partido, Salvador Sánchez Cerén, anunciando un futuro incierto para Silva. Posteriormente, el jefe de la bancada legislativa efemelenista y miembro de la Comisión Política, Schafik Handal, aseguraba que Héctor Silva dejaba de ser el candidato de su partido para disputarse la alcaldía de San Salvador en las elecciones del 2003. Acto seguido, los partidos AP, CDU y la organización Iniciativa Ciudadana —miembros de la coalición que gobierna San Salvador— anunciaron su respaldo a la candidatura de Silva, a pesar de la decisión de los dirigentes del partido de izquierda. En algunas páginas de los matutinos nacionales, Silva fue comparado con Joaquín Villalobos y Facundo Guardado, dirigentes históricos del FMLN, que abandonaron el partido para abrazar otros compromisos políticos.

Mientras tanto, el gremio médico seguía sin levantar la huelga hasta que no se publicara, sin observaciones, el Decreto Legislativo 1024 en el *Diario Oficial*. El día 2 de noviembre, Silva hizo pública su retirada de la contienda electoral por la alcaldía de San Salvador. El 4, los médicos rechazaron la mediación de Silva y del Arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, en el conflicto. El 6, las partes enfrentadas se reunieron en Casa Presidencial sin llegar a acuerdos concretos. Dos días después, las negociaciones se rompieron debido a la falta de consenso en torno al Decreto 1024. El 14, las fracciones legislativas opositoras ratificaron el referido decreto, sin tomar en cuenta las observaciones que le hizo el presidente Flores. Durante los siguientes días, diversos sectores, entre ellos ANEP y FUSADES, rechazaron el Decreto 1024, desatacando su inconstitucionalidad. La influyente prensa de derecha se sumó al embate en contra de la letra y el espíritu de la nueva normativa.

El 15, se normalizó la prestación de servicio en los hospitales nacionales Bloom y de Maternidad,

con el regreso de los galenos que se mantenían en huelga. El 20, algunos de los diputados de oposición que levantaron sus manos para aprobar el Decreto 1024 comenzaron a manifestar públicamente sus dudas sobre la constitucionalidad del mismo. Ese mismo día, la Corte Suprema de Justicia recibió la primera demanda por inconstitucionalidad en contra del citado decreto. Las gremiales empresariales lanzan una dura crítica al proceder legislativo de la oposición. “ANEP lamenta y a la vez rechaza los alcances del Decreto 1024 que ha venido a crear un clima de inseguridad jurídica, a partir de disposiciones que anticipan arbitrariamente la finalización de contratos que se han suscrito al amparo de la legislación vigente y que restringe la libre contratación consagrada en la Constitución de la República”, rezaba un comunicado desplegado en los principales medios de prensa escrita.

El 22, médicos de la comisión tripartita y funcionarios del gobierno de Flores se reúnen por tercera vez para plantear sus respectivos puntos de vista; al final del encuentro, nuevamente no queda nada en claro. Tres días después, en un nuevo encuentro, los sindicalistas ponen en tela de juicio la mediación del Arzobispo metropolitano, Fernando Sáenz Lacalle. El 27, manifestantes y agentes policiales antimotines se enfrentan en las cercanías del Hospital de Oncología del Seguro Social con el saldo trágico de 17 policías lesionados —según el matutino *El Diario de Hoy*— y ciudadanos afectados por gases lacrimógenos.

No está de más recoger un par de opiniones sobre la jornada. “No vamos a caer en el juego de los sindicalistas, que lo único que buscan es enviar un mensaje negativo al mundo, que este país es inseguro y violento”, dijo el presidente Flores, mientras el país albergaba a cientos de atletas que participaban en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El viceministro de Gobernación, René Figueroa, fue más allá al deducir responsabilidades: “hacemos un llamado al FMLN para que desactive la estrategia de choque. Hay un nexo entre la BRES, sindicalistas y el Partido Comunista”. Horas más tarde, un grupo enardecido de sindicalistas y miembros de diversas organizaciones irrumpió en la Asamblea Legislativa, dañando las instalaciones de la fracción de ARENA y del Movimiento Renovador. Por su parte, el jefe de los diputados del FMLN, Schafik Handal, hizo un balance de los hechos, desaprobando el procedimiento policial y justificando sutilmente la invasión en el Parlamen-

to: "protesto por las agresiones que sufrieron los manifestantes. ¡A mí también me cayeron gases! No lo justifico, pero la gente viene enardecida. El viceministro no merece gran respeto", acotó el veterano legislador. Ante las fallidas pláticas entre gobierno y gremio médico, las calles pasaron a ser el sitio propicio para descargar la creciente tensión social generada por la crisis, abriendo así las puertas a los actos de violencia, por un lado, y a la represión policial, por otro. En medio de la contienda, usuarios del Seguro Social y de los hospitales nacionales siguieron resintiendo los efectos de una huelga que cada día se hacía más difícil de sostener.

En lo que al tema económico concierne, la decidida apuesta de los mandatarios centroamericanos por el libre comercio marcó momentos decisivos durante los últimos meses del 2002. No ha causado extrañeza que, mientras en el corto plazo se vislumbra un Tratado Comercial con Estados Unidos y, a largo plazo, el Área de Libre Comercio para las Américas, los equipos económicos y comerciales de la región movilicen toda la maquinaria a su disposición para asegurarse un espacio en lo que consideran la más importante oportunidad de desarrollo que se les haya dado en los últimos años. Con todo, el optimismo de los sectores empresarial y gubernamental centroamericanos por el ALCA y los TLC contrasta con el pesimismo sostenido, no sin autoridad, por el Premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz, quien, desde una cita en el BID realizada el pasado 7 de noviembre, augurara un futuro incierto para el ALCA, debido a los desniveles entre las diferentes economías de la región.

El libre comercio global, añadía Stiglitz, debe tener en cuenta los aspectos de seguridad económica, seguridad política y de protección del medio ambiente, evidentes puntos flacos de las naciones centroamericanas. En ese marco, el 1° de noviembre, los ministros de economía de Centroamérica acordaron, desde Quito, Ecuador, acudir a las negociaciones como un solo bloque. En la misma línea, el día 14 fue crucial para las aspiraciones istmeñas: en efecto, los viceministros de Economía del área y su par de Estados Unidos pactaron arrancar las negociaciones del TLC el próximo 8 de enero en Washington. Con ese pacto, el equipo centroamericano podía darse por satisfecho al haber conseguido, ante de concluir el año, el inicio de las negociaciones. Sin embargo, los escollos empezaron a salir al paso.

Según la publicación de un rotativo nacional del 28 de noviembre, Estados Unidos empezó a poner condiciones a la región centroamericana para sentarse a negociar, entre ellas, el esclarecimiento del asesinato de 30 estadounidenses en Honduras ocurrido en 1988; de lo contrario, de acuerdo a las declaraciones del embajador norteamericano en ese país, Honduras podría quedarse al margen de las negociaciones. Otra de los temas que han causado inquietud a los negociadores centroamericanos fue la exclusión de un grupo especial que discutiera el espinoso tema agrícola con los estadounidenses. Precisamente ese es el único tema en el que se muestra un disenso en el marco de los preparativos; de ahí que, entre los siete grupos propuestos por Estados Unidos para negociar el TLC, no figure uno que discuta el tema agrícola y el posterior tema de los subsidios de la agricultura en ese país.

Con todo y lo anterior, en El Salvador, las expectativas fueron grandes, siendo el país centroamericano el que mayor énfasis ha puesto a la firma del TLC. En este marco, se han suscrito tratados con Panamá, República Dominicana, Chile y México, con resultados diversos. En el caso del tratado con República Dominicana, la propaganda gubernamental sostuvo que los productos salvadoreños penetraron fuertemente en aquel mercado; mientras que en el caso del tratado con México, se aseguró que éste ha conducido a una duplicación de las exportaciones hacia ese país. Empero, en esta última situación, la propaganda gubernamental dejó de lado que las importaciones han crecido en una cuantía muy superior a lo que lo hicieron las exportaciones. Y es que el gobierno salvadoreño ha caído en la postura dogmática de asumir el libre comercio como un fin *per se*, y no como una herramienta para alcanzar objetivos de desarrollo de más largo alcance. Es desde la primera perspectiva que se ha emprendido el proceso de negociación con Estados Unidos, dejando en un segundo plano consideraciones de fondo sobre las capacidades del país para enfrentar exitosamente la apertura comercial.

El mes de diciembre heredó, prácticamente, los mismos temas de debate que salieron a relucir en noviembre. Así, tras haber convocado a comicios el Tribunal Supremo Electoral, el mapa electoral comenzó a definirse y empezó, esta vez más insistentemente en los medios de difusión, el alardeo de políticos de todos los colores, promoviendo sus

obras o prometiendo nuevos proyectos, de salir airosos en las próximas elecciones. Igual que en los meses anteriores, la disputa por la alcaldía capitalina se convirtió en el principal centro de atención de los medios informativos. En este sentido, la segunda semana de diciembre, luego de las fallidas candidaturas de Alberto Arene y David Munguía Payés por la coalición que gobierna San Salvador, el actual síndico municipal, Carlos Rivas Zamora, se perfiló como virtual candidato del FMLN. Con Rivas, trascendió luego, los efemelenistas prescindían del CDU, AP e Iniciativa Ciudadana para disputar la comuna en coalición. El 15, durante la XVI Convención Nacional Ordinaria del FMLN, fue ratificada la candidatura de Rivas Zamora para competir por la Alcaldía de San Salvador. En el evento, las bases respaldaron las propuestas legislativas y municipales para el 2003, presentadas por la dirigencia efemelenista. El 16 de diciembre, con la presentación de Ricardo Perdomo como candidato de la coalición PDC-PSD-AP-Movimiento Renovador, quedaba dibujado el mapa de la contienda para la comuna capitalina: además de Perdomo competirían Jacir de Lovo, por ARENA; María Julia Castillo, por el PCN; y Rivas Zamora, por el FMLN.

Al día siguiente, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) dio a conocer los resultados de su último sondeo realizado en el año, en el que detallaba, entre otras cosas, que las preocupaciones de los salvadoreños tenían que ver con la situación económica y una cantidad importante se mostraba preocupada por la crisis en el sistema de salud. Además, de acuerdo con los resultados del IUDOP, "las intenciones de voto para diputados en el ámbito nacional se encuentran de la siguiente manera: la cuarta parte de la población no votaría por partido alguno, el 20.7 votaría por ARENA, el 18.8 por ciento lo haría por el FMLN, el 4.9 por ciento por el PCN y el 2.3 por ciento por el PDC. Menos del 2 por ciento se concentró en el resto de partidos y alrededor del 26 por ciento no dijo por cuál partido votaría para diputados".

En el caso de los concejos municipales, la situación era similar a escala nacional. Así, "el 22.8 por ciento manifestó que votaría por ARENA; el 20.9 por ciento dijo que lo haría por el FMLN, un 4.6 por ciento por el PCN, el 1.9 por ciento por la Democracia Cristiana, y el resto de partidos no aglutinó más del 2 por ciento. Sin embargo, el 26.4 por ciento afirmó que no sabía por cuál vota-

ría y el 21.6 por ciento manifestó que no votaría por partido alguno". Los resultados de la última encuesta del año fueron reveladores: ARENA se habría mantenido en las intenciones de voto, mientras que el FMLN habría sufrido un evidente desgaste. No obstante, ambas fuerzas políticas seguían aglutinando a la mayoría del electorado salvadoreño, dejando escasos espacios a las fuerzas alternativas.

En el plano económico, el entusiasmo por el TLC con Estados Unidos crecía en los círculos gubernamentales y empresariales, mientras los indicadores macroeconómicos anunciaban una leve recuperación de la economía en el último trimestre del año. Es más, de acuerdo al Banco Central de Reserva y a datos de CEPAL en su *Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe*, la economía salvadoreña había crecido un 2.3 por ciento del PIB al cierre del año. Aunque, de acuerdo al informe de la CEPAL, "el PIB por habitante continuó virtualmente estancado por tercer año consecutivo, [además], entre los factores que favorecieron el moderado repunte [del PIB] se encuentran el impulso, aunque aún débil, de la demanda estadounidense, y el dinamismo de la inversión pública resultante de la reconstrucción de los daños ocasionados por los terremotos de inicios de 2001". Finalmente, se concluyó, en el apartado sobre El Salvador, que "en sentido contrario incidieron los bajos precios internacionales del café, vigentes durante buena parte del año, y el aumento del precio del petróleo, que afectó negativamente los términos de intercambio. En tanto, la inversión privada se estancó, dado que se vio afectada por el deterioro de la estabilidad política y social interna". Otros datos que arroja el informe de la CEPAL detallan que las exportaciones salvadoreñas ascendieron a 3 870 millones de dólares, mientras que las importaciones contabilizaron 5 814 millones.

El día 12, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el Presupuesto General de la Nación, correspondiente al 2003, el cual asciende a 2 mil 486.7 millones de dólares. Al final de las negociaciones, se decidió que se recortaría el presupuesto del Órgano Judicial en 23 millones, de los 136 que pedía inicialmente; además se rebajó la emisión de títulos valores y se reforzó en 4 millones el presupuesto de la Universidad de El Salvador. El 19, el Banco Central de Reserva divulgó un informe en el cual se aseguró que la economía

nacional había crecido un 2.3 por ciento durante el 2002. El 29, el Ejecutivo afirmó que la inversión extranjera había alcanzado los 590.2 millones de dólares, siendo la agroindustria y la maquila los rubros más fortalecidos.

Por otro lado, en el marco de las negociaciones de un TLC con Estados Unidos, en diciembre se dio a conocer que el equipo salvadoreño de negociadores se reforzaba con el contrato de tres firmas consultoras norteamericanas. Una de las firmas se especializa en el tema textil y confección; la segunda en inteligencia política; y la última está dedicada a la construcción de coaliciones de apoyo. El equipo contaría también con el apoyo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que había aprobado, a mediados de diciembre, un préstamo de 2.5 millones de dólares para respaldar la negociación del TLC. De acuerdo a los términos del empréstito, cada país centroamericano negociador recibiría un monto de 500 mil dólares. Vistas así las cosas, diciembre cerraba con la mirada puesta en Washington, para dar pronto inicio a las negociaciones comerciales.

En el ámbito social, la crisis de la salud, junto con el problema de la violencia y, lindando con lo político, la cuestión del sistema carcelario, fueron los más destacados puntos que generaron airadas discusiones y focos de tensión social. Por ejemplo, las estadísticas policiales nuevamente sacaron a la luz el tema de la portación de armas, ante el creciente asesinato de personas con armas de fuego, registrado en el 2002. De acuerdo al balance de fin de año de la corporación policial, dado a conocer el 9 de diciembre, un total de 1 953 personas, es decir, un promedio de seis diarias, fue asesinado en el año que culmina. No obstante, el informe señala una disminución de asesinatos con respecto al 2001, cuando la cifra ascendió a 2 mil 207 personas. Según la policía, en El Salvador, la mayor parte de crímenes, el 86 por ciento, están relacionados con la violencia social: venganzas, intolerancia, violencia intrafamiliar, irracionalidad, alcoholismo, drogadicción y rencillas entre pandillas, entre otros. Además, se dice en el informe que en el 70 por ciento de los crímenes por violencia social se utilizaron armas de fuego, o, lo que es lo mismo, cuatro asesinatos diarios se dieron ese tipo de armas. El balance reporta además 18 secuestros, 828 casos de violación sexual y 5 325 robos. A juicio del jefe policial, Mauricio Sandoval, la prohibición de la libre portación de armas de fue-

go incidiría en la disminución de homicidios en el país.

Para culminar el mes, en lo que a nuevos hechos de violencia concierne, el día 16, durante una requisita policial en las instalaciones del Penal "La Esperanza", conocido como "Mariona", un grupo de reos enardecidos tomaron como rehenes a dos agentes de la División de Antinarcoóticos de la Policía, para luego asesinarlos brutalmente. La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, había intentado, sin éxito, obtener la liberación de los rehenes y posteriormente fue responsabilizada de los hechos, en el marco de una verdadera guerra sucia montada en su contra. El mismo Director de la Policía, Mauricio Sandoval, descargaba la responsabilidad en la funcionaria por haber interferido en el procedimiento policial que, de haberse llevado a cabo, seguramente habría cobrado la muerte de más personas —presumiblemente reos, en su mayoría—.

El 17, la Fiscalía General de la República anunció que investigaría la actuación de la Procuradora en el asesinato de los dos agentes policiales. Ese mismo día, De Carrillo se presentó a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa para explicar a los diputados su actuación en el operativo de Mariona. Un legislador arenero exigió la destitución de la funcionaria. Un día después, empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) denunciaron amenazas de muerte contra la Procuradora. El día 19, Sandoval anunció que apoyaría una demanda judicial de los familiares de los policías asesinados en contra de ella. Para suerte de la funcionaria, un informe de Medicina Legal constató que los agentes de la PNC murieron de forma inmediata y, aunque De Carrillo hubiera llegado a negociar su liberación, éstos hubieran fallecido a consecuencia de la gravedad de las lesiones recibidas.

Con todo, el candente capítulo dejó en evidencia algunas cuestiones que vale la pena recuperar. En primer lugar, por más que el cuerpo policial saliera en defensa del procedimiento realizado en el penal, aún quedaron las dudas acerca del mismo; en otras palabras, la Policía actuó sin prudencia, tratándose de un centro penal que alberga reos de alta peligrosidad. En segundo lugar, fue evidente que los adversarios políticos de la Procuradora —que suman todas las fuerzas en el interior del Parlamento, excepto el FMLN, así como algunos abogados y periodistas— no escatimaron papel y

pluma para arremeter en contra de la funcionaria en un intento por desprestigiar su gestión. En tercer lugar, y yendo más allá de los hechos, los medios de comunicación que insistentemente cubrieron el operativo no tuvieron el suficiente interés como para profundizar en el problema del hacinamiento en las cárceles salvadoreñas y su pésima administración, que son cuestiones medulares en la discusión. En virtud de lo anterior, podría haberse ahondado en una situación —la del sistema penitenciario nacional— que no alcanza a generar el suficiente interés en las autoridades y que amenaza con desbordar hacia una crisis si no se toma en serio.

Finalmente, en lo que se refiera al conflicto en el sistema de salud, la situación no presentó mejoras en el último mes del año. El Arzobispo de San Salvador, Mons. Fernando Sáenz Lacalle, resumió la situación en pocas palabras: “las posiciones siguen igual”. Así, el 4 de diciembre, la prensa de derecha continuaba haciendo eco de los supuestos perjuicios causados a la empresa privada por el Decreto 1024. El hecho más preocupante, según la versión de los medios, era el manejo de los desechos hospitalarios que, a partir del 5 de diciembre, quedaron a la deriva, debido al cierre de los contratos que tanto el Seguro Social como la red hospitalaria nacional mantenían con empresas privadas.

El 6, los médicos sindicalistas lideraron una tercera “marcha blanca” que concentró a opositores de la reforma planteada por Flores y su equipo. Ese mismo día, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, exigió a las partes que buscaran la solución a la crisis e hizo un llamado al cese de la huelga. Simultáneamente, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” desplegó un llamado a la sensatez y a la ética. En su pronunciamiento, la UCA propone que “tres cuestiones parecen claves para una negociación orientada por este criterio de carácter social y de bienestar público. La primera, es garantizar que los servicios de salud seguirán siendo prestados por el Estado. La segunda, es poner fin a la huelga y no tomar represalias contra los huelguistas. Por último, es necesario establecer, a mediano plazo, una estructura para discutir la reforma del sistema de salud”.

El día 9, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenaron que no se aplicara el artículo 5 del Decreto Legislativo 1024, dejando vigente la concesión de servicios de salud a empresas privadas. El 17, se

conoció que los huelguistas habrían dejado de percibir un total de 2 millones de dólares, en concepto de salarios y aguinaldos retenidos. El 19, el PCN y ARENA dieron sus votos para derogar el Decreto 1024, que impedía la privatización del sector; a la vez, los diputados aprobaron otro decreto, “Disposiciones de gestión pública de los servicios de salud y seguridad social”. El 20, el presidente Flores anunció un plan en el que ofreció a los médicos el pago por adelantado de 1 500 dólares, a cambio de horas extras para reponer las consultas perdidas. Los representantes del SIMETRISSE y del Colegio Médico adversaron la propuesta, afirmando que no ofrecía garantías laborales para quienes apoyaban la huelga. El 27, un grupo de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil desalojó, en horas de la madrugada, los hospitales Médico-Quirúrgico y de Especialidades del Seguro Social. El operativo policial fue duramente cuestionado por los sindicalistas y otros sectores sociales. Por último, el 29, el Obispo Auxiliar de San Salvador, Mons. Gregorio Rosa Chávez, propuso la intervención de un mediador extranjero en la crisis de la salud pública, tras la toma policial de dos hospitales públicos.

Así las cosas, el 2002 se cerró sin que las partes llegaran a un acuerdo en torno a la crisis en el sector salud. La aprobación del Decreto 1024 no hizo otra cosa que evidenciar que el camino legal fue sido el más adecuado para solucionarla. Al contrario, el referido decreto propició que los círculos políticos y económicos más influyentes de la sociedad salvadoreña montaran una demoledora campaña de desprestigio en contra de las fuerzas políticas y sociales que apoyaron la moción legislativa. La nutrida discusión jurídica hizo perder de vista el verdadero problema en cuestión: la salud y la seguridad social de los salvadoreños —sobre todo de los más desposeídos—, que siguen siendo amenazadas mientras las partes no muestren la voluntad de sentarse a dialogar para resolver un conflicto que se prolonga más allá de lo razonable.

En suma, los balances realizados en las áreas política, social y económica, en los dos últimos meses del 2002, dan cuenta de un contraste en las apreciaciones sobre los problemas nacionales. Ante todo, se impone desde los círculos oficiales, empresariales y mediáticos una lectura artificialmente optimista de las condiciones del país al cerrar el año. Tal apreciación sostiene que El Salvador, a pesar del impacto de los desastres siconaturales,

las condiciones adversas de la economía mundial y las sempiternas carencias sociales, se enfila inexorablemente hacia el desarrollo, tras el rumbo trazado por los Tratados de Libre Comercio y la globalización. De acuerdo a esta interpretación, El Salvador cierra un año en el que se habrían superado las expectativas trazadas desde el inicio del mismo. Así, se habría dado cumplimiento —con creces— a los acuerdos de paz; se habrían dado pasos agigantados en la reconstrucción nacional, luego de los terremotos del 2001; se habría reducido el analfabetismo y aumentado la matrícula escolar; se habría recuperado la economía nacional y asegurado la negociación de un Tratado Comercial con Estados Unidos, el mayor socio comercial del país y el principal destino de sus emigrantes.

Hay que destacar, además, que al cierre del año 2002, han aflorado nuevamente las valoraciones gubernamentales triunfalistas en las que se presenta un balance positivo, aunque lamentablemente parcializado, del desempeño económico. Esto, pese a que el año termina sin alcanzar la meta de crecimiento económico que el gobierno se trazó y los indicadores de situación de los sectores externo y público muestran prácticamente la misma situación desequilibrada de siempre. Frente a esta realidad, es alarmante que el gobierno continúe sin adoptar medidas correctivas y, lejos de ello, más bien parece aferrarse cada vez más a una estrategia de desarrollo centrada, simplemente, en la negociación y suscripción de Tratados de Libre Comercio. Después de la firma de tratados con Chile, República Dominicana y México —los cuales provocaron un empeoramiento de la balanza comercial con México y un minúsculo incremento de las exportaciones a República Dominicana—, ahora la nueva meta es la suscripción de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, cuya negociación arranca en enero del 2003.

Pero el 2002 también dio paso a tendencias positivas en términos de incremento de las tasas de crecimiento económico y de reducción del déficit fiscal. Así, se suscitó una leve recuperación de la tasa de crecimiento económico que, aunque no alcanzó las proyecciones trazadas, sí superó las obtenidas en el 2001. Debe decirse, empero, que este repunte obedece en gran parte a los ingentes flujos de inversión pública erogados por el gobierno para financiar los proyectos de reconstrucción después de los terremotos. Gran parte de estos recursos han

sido financiados esencialmente a través de donaciones y empréstitos, de modo que puede decirse que este tipo de crecimiento no es sostenible, habida cuenta que el gobierno no está en la capacidad de financiar, con sus propios ingresos, semejantes volúmenes de inversión. De no haber ocurrido los desastres del 2001, sin duda, las tasas de crecimiento habrían sido mucho más bajas, e inclusive pudo haberse experimentado un decremento en el Producto Interno Bruto (PIB). El otro signo positivo, dentro de lo que cabe, es una leve reducción del déficit fiscal en relación con el PIB. Sin embargo, esto ha sido producto de la política de contracción del gasto corriente y del despido de empleados públicos. Ello ha reducido el tamaño del Estado y su capacidad de regulación, algo que resta méritos al resultado inicial.

Nuevamente, echar manos de la última encuesta de opinión puede resultar provechoso. El desempleo, el aumento de la delincuencia y la privatización de la salud son tres problemas que le preocupan sobremanera a los salvadoreños y sobre los cuales sus expectativas son más bien limitadas. Este estado, contrario al optimismo gubernamental, se refleja en las preferencias electorales. De acuerdo a los resultados del sondeo de la UCA, la mayoría de la gente está angustiada por el desempleo y también por la pobreza, la inflación y la crisis económica, en general. El desempleo es tan importante ahora, que ha desplazado a la delincuencia a un segundo lugar. La mayor parte de la población no comparte la visión positiva del Poder Ejecutivo sobre el desempeño económico del año. Un poco más de la mitad considera que la economía ha empeorado y solo una reducida minoría piensa que ha ido para mejor. En el ámbito familiar, casi la misma proporción considera que su situación se mantiene igual, aunque la minoría que piensa que ha mejorado es algo mayor. Es en el sector rural donde se vive con mayor dureza esta crisis. Aunque las opiniones están divididas, una buena parte de la población no cree que los tratados de libre comercio vayan a mejorar su situación; al contrario, opina que ocasionarán perjuicios al país. En definitiva, pues, el modelo de gestión política, social y económica queda en entredicho al término del 2002; aún así, el optimismo gubernamental provoca tal ceguera, que la prédica de cualquier cambio en el orden vigente sueña, en los oídos de los señores de la política y la economía, a terrorismo o comunismo.